

PEDRO J. RAMIREZ

Sobre el asalto al Banco y otros dos atentados

S EAN guardias civiles o no sus protagonistas, el asalto al Banco Central de Barcelona es el primer resultado tangible de la política pusilánime y débil desarrollada por el Gobierno con respecto a los implicados en los sucesos del 23 de febrero. Desde la rápida exculpación de todos los números que secundaron a Tejero —incluidos aquellos que llegaron a disparar en el interior del Parlamento—, hasta el benevolente trato dispensado en materia de confort y comunicaciones con el exterior a los líderes de la conjura, todo el retablo de gestos relacionados con el tema ha contribuido a envalentonar a la ultraderecha golpista que tiene la percepción de que iniciativas de esa naturaleza pueden desarrollarse con un coste comparativamente bajo.

La misma sensación de impunidad que durante toda la transición ha impulsado el deterioro de la seguridad ciudadana tanto en el frente del terrorismo como en el de la delincuencia común se ha hecho extensiva durante los últimos meses a los afanes de quienes tratan de subvertir violentamente el orden constitucional. ¿Si un crimen de lesa patria como asaltar el Congreso de los Diputados queda saldado con veinte días de arresto, por qué no rizar el rizo de lo rocambolesco y vivir la experiencia de un plan tan descabellado y absurdo como el que transcurrió en la barcelonesa plaza de Cataluña? Cualquier aventurero, medianamente motivado ideológicamente, puede plantearse las cosas de este modo y obrar en consecuencia.

Triste y precario consuelo es el que puede extraerse del hecho de que las instituciones del Estado —desde el propio Gobierno a la Policía, pasando por la prensa y los partidos— hayan reaccionado con especial destreza y sentido de la responsabilidad desde el mismo momento en que este duro envite se produjo. Quiera el destino que no sea este vez cuando se desencadena la tragedia, pero el cántaro terminará por romperse si consentimos que viaje tan a menudo a la fuente.

El asalto al Banco Central puede constituir, de hecho, el primer acto de esa escalada de «terrorismo negro» que según todos los manuales de la desestabilización tendría que desencadenarse en España, para completar junto con la violencia revolucionaria de ETA y GRAPO una tenaza implacable de la que difícilmente podríamos salir con bien. Quien es capaz de movilizar a veintitantos hombres armados y sometidos a férrea disciplina militar en el centro de Barcelona, puede igualmente ordenar todo tipo de desmanes sangrientos.

Si este nuevo componente termina por perfilarse, entraríamos en un genuino proceso «a la turca» en el que crecientes sectores de la población empezarían a ver en las Fuerzas Armadas no tanto una amenaza involucionista como una esperanza de pacificación y normalidad. Desde ese momento la batalla por la consolidación de un régimen de libertades en España estaría poco menos que definitivamente perdida.

Aun es tiempo de cambiar el curso de los acontecimientos en vez de ir permanentemente a remolque de ellos. Para conseguirlo se precisa un Gobierno con raudales de autoridad, y la más firme decisión de aplicar unas leyes hasta ahora sólo muy tíbicamente utilizadas. La tambaleante experiencia de estos tres meses transcurridos desde el 23-F

demuestra que ese Gobierno no puede ser un gabinete monocolor. Leopoldo Calvo-Sotelo debe pues reconsiderar su negativa al pacto de amplia mayoría propuesto por los socialistas.

Jiménez Losantos y los mandarines

Dos días antes del asalto al Banco Central, Barcelona había sido escenario de otro atentado de consecuencias limitadas, pero onda expansiva muy amplia. Más grave que la propia herida en la rodilla de Federico Jiménez Losantos ha sido aún la reacción entre despectiva y perdonavidas de quienes en Barcelona y en Madrid tienen hace tiempo decidido que la defensa de la cultura castellana en Cataluña no figura entre su repertorio de guisos «democráticos».

Algunos han hablado torpemente de «piernicismo», otros de la «megalomanía» del agredido. Un periódico de Madrid con propósito de expansión en Cataluña, para el que la noticia del ataque de Jiménez Losantos mereció tratamiento informativo de pelea entre navajeros, tiene incluso el cinismo de invocar ahora la «dignidad intelectual» de aquellos a quienes tan sistemáticamente ha cubierto de improperios.

Este periódico nos llama «prensa amarilla» por publicar el «Manifiesto de los 2.300». Este periódico nos llama «tontos» por recoger, puntual y textualmente, las palabras sinceras vertidas por Jiménez Losantos a un redactor de la agencia Efe. Fue este mismo periódico el que achacó a los intelectuales que, encabezados por Amando de Miguel, se pronunciaron en favor de la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, un comportamiento desestabilizador del sistema democrático. Ahora los agredidos jurísticamente al tener noticias de la decisión de varios de ellos de abandonar los dominios de la Generalitat.

Uno ya no sabe si pensar que la soberbia intelectual de los nuevos mandarines es infinita o si creer que la agresión editorial contra los firmantes del manifiesto formaba parte destacada de los mencionados planes de expansión periodística y sus promotores temen quedarse sin el muñeco del pim-pam-pum ante el que acreditar su patente de catalanidad de nuevo cuño.

La irresponsabilidad de quienes desde enmoquetados despachos decidieron que mientras el vasquismo y el catalanismo eran expresiones progresistas, el navarismo y el valencianismo —por poner dos ejemplos de sentimientos regionales íntimamente entroncados con la idea de España— constituían modelos de comportamiento reaccionario y fascistoide, ha terminado preñando de grandes dosis de crispación adicional algunos de los puntos calientes de la geografía autonómica.

Aún escribo bajo el efecto de la inquietud que me produjo la visceral reacción de buena parte del público cuando durante la conferencia que pronuncié el viernes en el Teatro Tàrra, de Valencia, tuve la osadía de argumentar que nunca debe quemarse ninguna bandera: «¡La catalana sí, la catalana sí!», me replicaron desde el anfiteatro en medio de grandes aplausos dirigidos al espontáneo. Mi discrepancia, demandando respeto a cualquier enseña que represente algo para cualquier vecino, me valió un gran abucheo y una ingenua alusión pos-



Leopoldo Calvo-Sotelo.

Tras la tambaleante experiencia de los últimos tres meses, Calvo-Sotelo debe reconsiderar su negativa al Gobierno de amplia mayoría propuesto por los socialistas

terior al «País Valencià» —allí insisten en que hay que hablar de «Reino de Valencia» para eludir la dialéctica de los «Países Catalanes»— desencadenó una bronca monumental.

De la misma forma que esta expresión de fanatismo engarza directamente con Terra Mure o Herri Batasuna, no veo razón para negar el pan y la sal de la democracia a quienes desde planteamientos moderados defienden las señas de identidad valenciana como algo específicamente diferenciado del pancatalanismo de Pujol.

Castedo debe irse

Setenta y dos horas después de haber cesado a Iñaki Gabilondo, Fernando Castedo aún tiene la desvergüenza de continuar usurpando la Dirección General de RTVE. Su salida del ente público es un imperativo de profilaxis democrática, porque en toda la historia del tránsito político no se había producido una traición tan flagrantemente de la confianza depositada por el pueblo en un alto funcionario.

A medida que el transcurso del tiempo va proporcionando nuevos datos sobre lo ocurrido, más inconcebible me parece la canallada urdida contra un periodista que ponía toda su alma en el acertado cumplimiento de su función social. Gabilondo ha sido el chivo expiatorio de las frustraciones de un Gobierno que reiteradamente viene aprovechándose del temor que todos sentimos a un nuevo golpe de Estado, para vulnerar impunemente los derechos ciudadanos.

Más allá de su inocuo aspecto de Woody Allen de tercera, Castedo ha exhi-

bido una inesperada capacidad de despotismo que ni de lejos pudo achacarse a sus denostados antecesores en el cargo. Rafael Ansón estuvo siempre del lado de los profesionales y Fernando Arias-Salgado supo comportarse como un caballero, aguantando el tipo hasta el mismo día de su marcha.

¿Qué se puede decir de la catadura de un individuo que se ampara en la nocturnidad de la madrugada y la alevosía del golpe de teléfono para anunciar a uno de sus más directos colaboradores que ha decidido endosarle su propio fracaso? Si alguien tenía que haber hecho las maletas era el señor Castedo, cuyo sueldo archimillonario, superior al del propio jefe del Gobierno, no le ha inspirado lo suficiente para aquilatar cuál era su verdadero margen de autonomía.

Alegar que Gabilondo estaba apartándose de los objetivos trazados es un subterfugio de bellacos. En los informativos de televisión Gabilondo venía haciendo lo mismo que ha hecho toda su vida, lo único que sabe hacer: trabajar catorce horas diarias con el permanente afán de contribuir a una mejor satisfacción del derecho de todos a estar bien informados. Y eso, sin ningún carnet en el bolsillo, con muy pocos prejuicios en la cabeza y con bastante más serenidad y sentido común de lo que a menudo se estila entre nosotros.

Gabilondo no era una incógnita. Tras de él había ya una estela de casi veinte años de profesionalidad y quien le contrataba debía saber a qué atenerse. En lugar de cesarle, Castedo tendría que haberle pedido perdón por desplazarle de su fantástica trayectoria en la cadena SER con el engaño de un techo informativo que luego iba a ser incapaz de mantener.

Pero la ocultación de la verdad es, al parecer, recurso habitual del señor Castedo. Nadie puede creer su cándida versión de que no han existido presiones políticas detrás de la brusca defenestración del periodista. ¿A quién trata de tapar el señor Castedo prestándose al triste rol de mamporrero? ¿Quié? ¿Quizá a ese sinuoso mentor político suyo que, almorzando en un restaurante de nombre náutico le exigió el otro día la cabeza de Gabilondo?

Sea como fuera, Castedo se ha demostrado indigno de la confianza pública. Su permanencia en el cargo supone una afrenta a la profesión periodística y de rebote a toda la sociedad española. Ningún partido democrático que se precie como tal puede seguir sentado ni un minuto más en un consejo de administración con semejante individuo en la cabecera.

Soy consciente de que en determinados despachos de Prado del Rey estas líneas serán acogidas con despectivo escepticismo. El insuficiente nivel de solidaridad hasta ahora generado en torno a Gabilondo es una nueva muestra de los tupidos intereses allí creados a base de ordeñar inmoralmemente la vaca del dinero público. ¿Llegará a solidarizarse con Gabilondo quien aprovecha su elevado rango para aupar a su amante mucho más allá de su obvio nivel de incompetencia? ¿Lo hará ese tímido muchachito que, a la chita callando, ha llegado a simultanear su condición de jefe de prensa de un destacado ministro con la de director de un programa informativo en el que lógicamente ha de hablarse de ese destacado ministro? De momento ambos —además de seres de carne y hueso, son también prototipos— se han callado como putas.